



Presentación

Héctor Antonio Padilla Delgado*

Violencia, violentar, violar. Forzar, doblegar, mandar, imponer. Profanar, mancillar, deshonrar, corromper, envilecer. Humillar, doblegar, someter, dominar, avasallar, sojuzgar, aplastar. Muchas son las palabras, muchos los nombres con que la nombramos. Son las maneras de llamar a ésa que está presente, nunca ausente, y ahora desbordada: la violencia. Los ensayos que se reúnen en este dossier hablan de ella, de cómo ha crecido en cada rincón del país, de cómo se parece tanto en cada caso y parece ser la misma en todos lados. Son cuatro los ensayos. Uno que muestra una panorámica nacional y propone un marco interpretativo para comprender la bestia que despertó en la selva *hobbseana* que hoy es México; y otros tres que ofrecen imágenes nítidas de los modos en que ésta se pasea por las tres esquinas nortenas del país: Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.

La violencia como espectáculo: los años del plomo

Adrián Acosta Silva*

Lo que no tiene nombre no existe
Vladimir Nabokov, *Invitado a una decapitación.*

La ola de violencia que recorre el país en los últimos años ha sido objeto de las más diversas aproximaciones, interpretaciones y preocupaciones. Desde el Presidente de la República hasta los análisis

políticos, de las cúpulas empresariales a los púlpitos de los prelados y las oficinas de alcaldes y gobernadores, de los periodistas hasta los activistas de las organizaciones civiles o políticas y los dirigentes de los partidos políticos, la violencia se ha colocado en el centro de la agenda pública y de los más variados esfuerzos gubernamentales y civiles, bajo el supuesto de que los miles de homicidios que observamos son un riesgo para la cohesión social, para las instituciones y para el orden cívico, el crecimiento económico y la vida política nacional.

Aunque la violencia que observamos es un fenómeno complejo, la interpretación oficial —vale decir, la que ofrece cotidianamente el calderonismo desde 2007— señala que esta ola de violencia es producto de la acción del Estado para imponer el orden legal a los grupos delictivos, y afecta fundamentalmente a estos grupos, pues les significa la pérdida de territorios donde las actividades ilegales (principalmente las del narcotráfico), habían impuesto un orden criminal e inmoral a varios territorios y regiones del país. Bajo la óptica del oficialismo, esa lucha se cifró en código de guerra, lo que explica el empleo de las fuerzas federales y del ejército para

*Docente-investigador de la UACJ.
*Docente de la Universidad de Guadalajara

combatir al narco. Pero un típico efecto perverso se ha expandido en esta estrategia: la violencia se ha extendido aún a regiones y ciudades donde el narcotráfico no tenía una presencia significativa ni histórica ni recientemente, desarticulando mecanismos y reglas de convivencia que regulaban los intercambios de mercado ilegal, evitando al máximo la violencia homicida, y cuyas expresiones, cuando ocurrían, se resguardaban de la luz pública.

Hoy, la violencia se ha convertido en un espectáculo sangriento, dominado por imágenes de decapitados, colgados, amputados, cuerpos desmembrados y quemados. Es una violencia depredadora. Ejecuciones y masacres con granadas, cuchillos y balas, realizados por sicarios, grupos criminales o individuos solitarios ha configurado un escenario siniestro que se reproduce sistemáticamente en los medios y en las calles. Desde Tijuana a Morelia, de Acapulco a Ciudad Juárez, de Culiacán a Tepic, de Guadalajara a Monterrey, Tampico o Nuevo Laredo, estas imágenes de violencia dominan el clima público mexicano de los últimos años. En el gobierno y desde los medios se nutre cotidianamente la idea de que estamos atrapados en una guerra entre el Estado

y las bandas de narcotraficantes, que implica, de manera inevitable, “daños colaterales” entre la población civil, y activan nuevas disputas territoriales entre los narcos que terminan, a veces, por matar a inocentes. Los pleitos entre El Chapo y El Barbas, entre La Tuta y La Puerca, entre La Barbie y El Popeye contra el *Pozolero* o contra el *Farmero*, se colocan como evidencias para justificar la acción del gobierno federal y explicar los más de 30 mil muertos acumulados en lo que va del sexenio calderonista.

Estas imágenes van acompañadas de un lenguaje público habitado por palabras que han sido vaciadas de significado preciso, en donde hechos y juicios se confunden. Ahora, cualquier homicidio aparece como ejecución; un asesinato aparece como venganza; la guerra de las drogas es un pleito entre el cártel del Golfo contra el cártel de El Chapo; de La Familia michoacana contra los Zetas tamaulipecos, y de estos contra los Beltrán Leyva o los Carrillo Fuentes. En Ciudad Juárez, Los Aztecas se batan en duelo contra los de La Línea, mientras que Los Pelones se enfrentan a muerte a Los Artistas Asesinos; en Guadalajara se argumenta que los homicidios de policías municipales, agentes del ministerio público y las decapitaciones de civiles anónimos son el resultado de la lucha entre el cártel de Sinaloa contra células locales de La Resistencia michoacana, o es el efecto que resienten los grupos delictivos por la acción de la policía estatal. En todos los casos se trata de una narrativa oficial edificada sobre el argumento de que la sangre y las muertes son el precio inevitable a pagar en el combate por restablecer el orden perdido o corrompido por años de negligencia de gobiernos anteriores. Más aún: se asegura que los operativos del ejército donde han muerto más de





500 individuos con balas federales en los últimos años, son actos legítimos de respuesta militar a los ataques que hacen criminales a los soldados. “La violencia es por los violentos” ha declarado en varias ocasiones y en contextos diferentes el propio presidente Calderón.

Este discurso, insisto, se ha colocado en el centro del espectáculo de la violencia de los últimos años. Sin embargo, el recuento de los daños, el número de muertes violentas por regiones y municipios, la tasa de homicidios en ciertas ciudades y territorios, parecen indicar otra cosa. Una hipótesis inquietante ha sido lanzada recientemente por Fernando Escalante, investigador de El Colegio de México: la intervención del ejército en la guerra contra el narco ha provocado que se dispare dramáticamente el índice de homicidios en los últimos tres años. Con cifras y registros puntuales, extraídos de los boletines de prensa del ejército mexicano, de la lectura de los diarios nacionales, y de registros de ministerios públicos, Escalante ha estado documentando pacientemente la lógica depredadora de la intervención militar y sus efectos en la desestructuración del orden social de ciudades y regiones enteras del país. Su proyecto se titula: “Violencia, criminalidad y estrategia gubernamental: un diagnóstico alternativo”.¹

El supuesto general de su estudio es que una intrincada red de relaciones entre actores del mercado de prácticas ilegales o semilegales permitió contener y disminuir la violencia homicida desde 1990 y hasta el 2007. Fue un proceso largo tendiente a civilizar los intercambios del mercado de la ilegalidad, que permitió organizar la tolerancia en torno a fenómenos como el narcomenudeo, la venta de mercancías piratas, la instalación del comercio informal. Esta forma

de ordenamiento colocó a las policías municipales en una posición estratégica de intermediación entre los actores de esos mercados, estableciendo límites a la violencia, tolerando prácticas corruptas pero altamente efectivas para contener los impulsos homicidas. El bien mayor de todo ello era claro: evitar que las disputas se resolvieran con la muerte. Eso explica que en términos generales, la tasa general de homicidios hubiera mostrado una clara tendencia hacia la baja hasta el año 2007.

Sin embargo, desde 2008 la tasa se dispara. ¿Qué lo explica? Para Escalante la causa es la intervención del ejército. Esa intervención rompió las reglas del viejo orden sin ofrecer nada a cambio. Las policías locales, poseedores de cierta “sabiduría convencional”, conocen casas, grupos y líderes locales, información que no tiene el ejército. Eso despertó a la bestia. Los datos de su estudio son perturbadores: buena parte de los homicidios (cerca de un tercio) de 2008 al 2010 se concentran en 4 ciudades: Juárez, Tijuana, Culiacán y Mazatlán, es decir, lugares donde hay operativos militares, se despidieron a los policías municipales y se ensayan desde hace tiempo los esquemas de “mando único”. Las masacres se han

¹ Una versión sintética de los primeros resultados de este proyecto fue publicada por el propio Escalante en “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”. *Nexos*, 397 (enero, 2011).

multiplicado frente a las narices de soldados y generales, y no es claro que sean eventos provocados por las disputas por el territorio entre *El Nextel* y *El Toñón*, o entre *El 67* y *Tony Tormenta*. Pero peor aún: regiones que difícilmente pueden ser lugar de disputas entre cárteles de la droga, como en el sur de Veracruz o la tierra caliente michoacana, se han convertido en lugares donde los homicidios se han elevado a índices históricos.

Escalante ensaya una interpretación general: los operativos militares han provocado la ruptura de los dispositivos del orden social en los territorios locales, y la multiplicación de la acción directa, el homicidio, rebasa la lógica de los pleitos entre pandilleros y narcotraficantes contra el ejército. Más bien, la ignorancia y el desprecio hacia los órdenes locales ha provocado el retorno de una violencia que se creía erradicada desde los años treinta del siglo pasado. Esta interpretación es una crítica demoledora a la estrategia del calderonismo y, en general, del oficialismo, y coloca el énfasis en la revisión del papel de las policías municipales en la estructuración del orden de los mercados ilegales en el país.

En Jalisco se comenzaron

a sentir los efectos de estas acciones de demolición del papel de las policías locales desde antes, con la creciente intervención de la policía del estado en numerosos operativos municipales. Pero con el calderonismo como contexto nacional, esos efectos se multiplicaron. La zona metropolitana de Guadalajara (que hoy incluye a 7 municipios conurbados y donde se concentra casi la mitad de la población total de la entidad) comenzó a ser el sitio frecuente de ejecuciones y homicidios que habían estado contenidos claramente desde los primeros años del siglo XXI, pero que se dispararon a partir del 2009. Cadáveres abandonados, generalmente mutilados, aparecen junto con la masacre de policías locales en municipios como el de Jilotlán de los Dolores, al sur del estado, o con el asesinato de agentes del ministerio público, jefes y agentes investigadores (los antiguos policías judiciales) en la capital del estado. Al mismo tiempo, regiones como la costa norte del estado (frontera con Nayarit, y en donde se ubica el *glamour* de Puerto Vallarta y la pomposamente denominada *Riviera Nayarit*) se consolida proporcionalmente como la región más violenta del estado. A condición de examinarlo con algún detalle, las hipótesis de Escalante en torno a la crisis del orden local como explicación de lo que ocurre en Jalisco, en Chihuahua o Tamaulipas, parecen ser capaces de proporcionar una imagen comprensiva aunque insuficiente para tratar de entender qué es lo que ocurre con la violencia depredadora en México.

En este marco interpretativo, tal vez sea posible valorar los efectos contraproducentes de una visión que, bajo el argumento de la defensa de legalidad y del Estado de derecho, ha emprendido una cruzada sangrienta que ni resuelve el problema ni reformula los códigos de





un nuevo orden local en diversos territorios del país. Peor aún: los efectos del activismo gubernamental mediante el uso intensivo del ejército y de las fuerzas federales han abierto la puerta a la vieja pesadilla de la jungla *hobbesiana* en cientos de municipios y poblaciones del país, donde la ley del más fuerte impone su dominio en un contexto de evaporación del Estado, incapaz técnica y políticamente de imponer su fuerza, y donde miles de ciudadanos atestiguan, todo los días, el rostro sanguinolento de la bestia.

La violencia en el noreste. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no?

Camilo Contreras Delgado*

¿Por qué a nosotros? ¿En qué momento llegó esta ola de violencia al noreste del país? Son preguntas recurrentes y que denotan algo así como un *shock* social. En el noreste todavía estamos con los ojos bien abiertos, casi desorbitados y volteando para todos lados preguntándonos de dónde nos vino esta atrocidad. Los mitos y orgullos regionales quedaron en entredicho. Nos sentíamos la cultura que nació del trabajo y el esfuerzo, del “empreendedorismo”; nos veíamos como la vanguardia nacional, el México no profundo. Los altos indicadores de desarrollo así como la presencia de bajos índices de marginación respaldaban las presunciones norestenses. Entonces, ¿por qué a nosotros? Primero: ¿quiénes son o somos ese “nosotros”? Esa pregunta está pensada desde las clases media y alta así como de los sectores hegemónicos. Desde esta forma de pensar se asume que el noreste es sólo el campo de batalla donde se dan

* Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

enfrentamientos entre delincuentes de diferentes bandos y entre éstos y las policías estatal y federal, el ejército y la marina. Es decir, como si los delincuentes y los policías y tránsitos corruptos hubieran caído de no sé dónde. Nada más ficticio e ilógico. Preguntas más complejas y que van más allá del *shock* pueden ser: ¿De dónde salieron todos esos delincuentes? ¿Desde cuándo están esos criminales en la región? ¿Qué condiciones añejas y estructurales facilitan el reclutamiento de jóvenes a las organizaciones criminales? Entonces veremos que el México profundo también era parte del norte.

Nuevos y desagradables términos: el lenguaje es realidad

La sociedad norestense se ha visto forzada al aprendizaje y al manejo de términos incómodos, desagradables, indeseables. No es para menos, la región está metida en una situación desagradable, indeseable, horrible, inaceptable. Es decir, tenemos que referirnos a la realidad de algún modo, por más fea que ésta sea: el lenguaje es realidad. Un indicador de la violencia generalizada es el lenguaje compartido por la mayor parte de la sociedad. Los términos como “levan-